



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, febrero 23 de 2023

Radicado: 05001 31 05-008-2022-00251-01

Accionante: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Demandado: ERIKA ANDREA RODRÍGUEZ CASTRILLÓN

Vinculado: ASOCIACIÓN SINDICAL DE PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-
DIRECTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-ASPEC ANT
Y SINDICATO DE EMPLEADOS UNIDOS PENITENCIARIOS -SEUP
SECCIONAL MEDELLÍN

Decisión: CONFIRMA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, se constituyó en audiencia pública en el presente proceso Especial de Fuero Sindical de la referencia con el fin de dictar la providencia correspondiente.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogiéndose el proyecto presentado por el Magistrado Ponente, doctor DIEGO FERNANDO SALAS.

ANTECEDENTES

A través del trámite Especial del Fuero Sindical pretende la sociedad accionante se autorice el levantamiento del fuero sindical de que goza la señora Erika Andrea Rodríguez Castrillón en su calidad de directiva de las agremiaciones Asociación Sindical de Penitenciaros y Carcelarios-Directiva del departamento de Antioquia-ASPEC ANT y Sindicato de Empleados Unidos penitenciaros -SEUP seccional

Medellín, a fin que se permita hacer efectivo el acto administrativo que dispuso su remoción del cargo.

Como causal adujo que, la accionada quien ostenta el cargo de dragoneante código 4114 de la planta global del INPEC incurrió en ausentismos, incumplimiento de sus funciones y compromisos, lo que se expresó en resolución N° 000186 de enero 14 de 2022 donde se le declara insubsistente de la carrera Penitenciaria y Carcelaria Nacional por evaluación de desempeño no satisfactoria.

Reseñó que la señora Rodríguez Castrillón ingresó en periodo de prueba mediante resolución N° 001714 de abril 27 de 2011 en el cargo de Dragoneante código 4114 grado 11 de la planta global del INPEC; que mediante resolución N°000106 de enero 22 de 2013 se inscribió en el escalafón de carrera penitenciaria y Carcelaria dando paso a los derechos de carrera y consecuentes deberes. Que la accionada conforme constancia de noviembre 8 de 2018 ocupa el cargo de segundo suplente en la organización sindical “Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios SEUP – seccional Medellín” y mediante registro del 23 de febrero de 2022 se informó de su nombramiento como tesorera en la Asociación Sindical de Penitenciarios y Carcelarios – ASPEC.

Que la accionada, en varias ocasiones se ausentó injustificadamente del lugar de trabajo, dando lugar a informes y llamados de atención, se suscribieron planes de mejoramiento los que incumplió, comportamiento irregular que de forma cierta afectó el servicio penitenciario, por lo que al ser evaluada su desempeño laboral para el periodo 01/02/2020 al 31/01/2021 obtuvo como calificación 58.53% que corresponde al nivel no satisfactorio, decisión que no fue cuestionada por la actora, por lo que el 26 de mayo de 2021 se expidió la constancia de ejecutoria.

Luego, con acta 506 de julio 12 de 2021 la comisión de personal de la Regional Noreste del INPEC emitió el concepto que da cuenta del incumplimiento de

compromisos laborales, lo que fue trasladado a la Sub directiva de Talento Humano y luego el Director General del INPEC emitiendo la resolución 186 de enero 14 de 2021 por la cual se le declara insubsistente, notificada personalmente el 22 de febrero de 2022, interponiendo recurso de reposición, pero resuelto negativamente en resolución N° 002588 de abril 18 de 2022, decisión también notificada a la accionada el 22 de abril de 2022.

Bajo este recuento señala que existe una justa causa para levantar el fuero del que goza la accionada para hacer efectiva la resolución N° 00186 de 2022.

En providencia del 26 de agosto de 2022 se admitió la demanda especial de fuero sindical – permiso para despedir, disponiendo la notificación a la accionada y a las organizaciones sindicales vinculadas ASPEC – ANT y SEUP Seccional Medellín, practicada en los correos electrónicos suministrados en el escrito de demanda (archivos N° 8/10), sin que estas se hubieren pronunciado.

En sentencia que desató el trámite de primera instancia la falladora enunció los diferentes medios de prueba que dan cuenta de las faltas imputadas a la actora, los seguimientos, llamados de atención, plan de mejoramiento, la valoración de desempeño realizada el 17 de febrero de 2021 por el periodo del 01/02/2020 al 31/01/2021 que generó un resultado no satisfactorio del 58.53%, por la cual se emite la resolución N° 00186 de 14/01/2022 declarándola insubsistente.

La A QUO concluyó que la declaratoria de insubsistencia se basó en el reiterado incumplimiento de sus deberes, que de forma objetiva generó una calificación insatisfactoria y consecuentemente la declaratoria de insubsistente, conclusión que se sustenta en el sistema de evaluación de empleados establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 407 de 1994, además de haberse respetado el debido proceso, el ejercicio del derecho de defensa sin que justificara su conducta reprochable. Así las cosas, ordenó el levantamiento del fuero sindical, autorizando

la aplicación de la resolución que declaró la insubsistencia en el empleo de Erika Andrea Rodríguez Castrillón.

Decisión que no fue recurrida por las partes, pero al ser adversa a los intereses de la empleada de la misma conoce esta corporación en el grado de consulta atendiendo a las premisas del artículo 69 del CPTSS.

Se pone de presente que siendo realizada la diligencia de juzgamiento el 26 de enero de 2023 a las 4:00 pm de la cual se remitió a la accionada el link de conexión a la audiencia virtual a las 3:30 pm, a través de correo electrónico recibido a las 5:14 pm la señora Erika Rodríguez expresó que solo hasta ese momento se enteró de la audiencia y solicitó su reprogramación (archivo N° 24)

Luego, el 3 de febrero de 2023 el Dr. Luis Carlos Méndez Ribón, anunciándose como apoderado de la señora Rodríguez Castrillón presentó escrito que enuncia como “recurso de apelación” o en su defecto para que sus argumentos sean valorados en el grado de consulta.

En síntesis, el apoderado aludió a la ocurrencia de la prescripción de la acción en tanto entre la firmeza del acto administrativo que decidió la insubsistencia 22/04/2022 y la presentación de la acción judicial que en su sentir ocurrió el 01/09/2022 transcurrieron más de 2 meses, razón por la que solicita la revocatoria de la decisión (archivo N° 26- primera instancia).

Solicitud que fue refutada por la activa indicando que la demanda de levantamiento de fuero sindical fue presentada a través de canales virtuales el 9 de junio de 2022, siendo repartida el día siguiente (10/06/2022), por tanto, es incorrecto el conteo que expuso el togado, cuyo recurso tacha de extemporáneo ya que la notificación de la sentencia se surtió en estrados el 26 de enero de 2023 (archivo N° 2 – segunda instancia).

CONSIDERACIONES

Corresponde a esta corporación determinar si se satisfacen los presupuestos para el levantamiento de la garantía foral que ampara a la señora Erika Andrea Rodríguez Castrillón a efectos de proceder a la desvinculación del empleo público, de igual forma se pronunciará sobre los argumentos expuestos por la pasiva que enuncia como “recurso de apelación”

Pues bien, resulta pertinente indicar que el artículo 39 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de asociación sindical, el que se materializa con la posibilidad de los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones. Derecho que hace parte de los compromisos y cometidos internacionales del Estado Colombiano, pues se halla consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (artículo 23-4) el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (artículo 8), además el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Protocolo de San Salvador) (artículo 8 literal a)

Adicional, el derecho de asociación sindical es reiterado en los convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por el estado colombiano a través de las leyes 26 y 27 de 1976, convenios relativos a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva, respectivamente, los cuales hacen parte de la legislación interna, por incorporación del artículo 53, 93 de la Constitución Política. Convenios que revisten el derecho de asociación sindical de la garantía de no sufrir injerencia por las autoridades públicas o actos discriminatorios en contra de la libertad sindical.

Una de las materializaciones de la protección a la libertad sindical se halla en el artículo 405 del C.S.T que establece la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de

trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo”.

Es así que, cuando el empleador pretenda dar por terminado el contrato de trabajo, la relación legal y reglamentaria o variar significativamente las condiciones de un empleado aforado, habrá de acudir ante la autoridad judicial para obtener permiso al respecto, esto como garantía para que el empleador no adopte decisiones arbitrarias como medio de presión, retaliación, acoso o persecución sindical. Comporta pues el fuero, además de una medida individual de estabilidad en el empleo, una misión colectiva, cual es blindar a la organización sindical de ataques a sus integrantes para que no se debilite su estructura y estos puedan ejercer la defensa de los derechos laborales de los integrantes de la organización sindical.

Se precisa que, tratándose de la garantía foral para servidores públicos, se exige que antes de proceder a la materialización de los actos administrativos de ejecución de los actos de fenecimiento del vínculo se obtenga del juez laboral competente la calificación judicial (Corte Constitucional C 033 de 2021)

Trámite que conforme al artículo 113 CPTSS impone al funcionario judicial verificar la ocurrencia de la causa que alega el empleador; justas causas que conforme al artículo 410 del C.S.T incluye las enlistadas en los artículos 62 y 63 de la misma codificación, los eventos de liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del patrono durante más de ciento veinte (120) días. Además, en tratándose de servidores públicos tal compendio ha de complementarse con las causales de retiro del servicio, Ley 909 de 2004.

Ejercicio de la acción que se somete a un término de prescripción especial, dos (2) meses, que para el evento del levantamiento se contabiliza desde que el

empleador tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa (artículo 118 CPTSS)

Ahora, respecto al levantamiento del fuero sindical para el retiro de empleados en razón a la ejecución de una sanción disciplinaria, causal establecida en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, razonó la Corte Constitucional que el fuero que protege al servidor no comporta una coraza que le exima del cumplimiento de sus deberes, al respecto la sentencia C - 033 de 2021:

Para resolver entonces el problema jurídico relativo a la constitucionalidad de la excepción al levantamiento del fuero sindical, para retirar a empleados que han sido objeto de una destitución disciplinaria, reitera la Sala Plena de la Corte Constitucional que, en los términos expuestos en la presente sentencia, el fuero sindical es una garantía fundamental para el ejercicio de la libertad sindical, pero precisa, igualmente, que ella no comporta algún tipo de inmunidad para el aforado. Es decir, que del artículo 39 de la Constitución no se deriva una exclusión de los empleados públicos respecto del control disciplinario y, por lo tanto, no autoriza a dichos servidores públicos para incurrir en faltas disciplinarias, sin que ello les acarree las correspondientes consecuencias¹. Una conclusión distinta sería inconstitucional, desde distintos puntos de vista

Con estas premisas legales y jurisprudenciales se descende al caso concreto y se verifica la satisfacción de los presupuestos de prosperidad de la pretensión de levantamiento de fuero sindical para retirar del servicio a la accionada, así:

1. **Se demuestra la calidad de aforada de Erika Andrea Rodríguez Castrillón (artículo 406 del CST)**, condición que deviene del ejercicio del cargo de segundo suplente en el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios SEUP, Seccional Medellín, inscrita como tal según acta del 8 de noviembre de 2019, condición de aforada que certifica la dirección de talento humano del INPEC en misiva del 6 de diciembre de 2021 (Archivo N° 6.1.11).

¹ “Para evitar la arbitrariedad de un lado y, para impedir el abuso de la misma cuando se cometieren faltas graves por los directivos sindicales u otros trabajadores amparados por el fuero, este último puede ser levantado, esto es, deja de tener (eficacia), previa autorización judicial, es decir, que queda bajo la protección del Estado”: sentencia C-725/00.

Se destaca que pese a que el 23 de abril de 2022 se dejó constancia del registro de modificación de la junta directiva de la organización “Asociación sindical de penitenciarios y carcelarios - directiva del departamento de Antioquia” que da cuenta del nombramiento de la señora Erika Andrea en el cargo de Tesorera (archivo N° 6.1.10) , tal condición fue posterior a la notificación del acto administrativo de declaratoria de insubsistente, por tanto el mismo ni otorga en la accionada una garantía foral, como tampoco su desvinculación denota una afrenta a la organización sindical de la que no era directiva al momento de producción y notificación de la decisión de desvinculación.

2. Calificación insatisfactoria que da lugar a la decisión de remoción del cargo por insubsistente.

Los archivos de la carpeta “Pruebas documentales numeral 6.1.14-Oficio N°2022IE0090772 de 06 mayo de 2022 con anexos” dan cuenta de los recurrentes eventos de ausentismo laboral de la señora Rodríguez Castrillón en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

En razón de esta falla recurrente se iniciaron sendas investigaciones disciplinarias donde fueron recibidas declaraciones de los superiores funcionales de la accionada, a quien además se le permitió ejercer el derecho de contradicción y defensa, empleada que en una ocasión presentó un certificado de incapacidad, pero que al ser verificada su validez con la institución prestadora de servicios de salud (Hospital Regional de la Orinoquia ESE) esta indicó que no corresponde a documentos emitidos por esta institución.

 <p>HORO HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA NIT. 891.855.029-5</p>	<p>COMUNICACIÓN EXTERNA</p>	<p>FECHA: 24/08/2018 VERSIÓN: 4 PÁGINA 1 DE 1</p>
<p>PJ-HORO-26.2-2021 -665 Yopal, 20 de diciembre de 2021.</p>		
<p>Señora. IMELDA LÓPEZ SOLÓRZANO. cud.noroeste@inpec.gov.co Directora Regional Noroeste. La ciudad.</p>		
<p>Referencia: Solicitud de verificación incapacidades médicas. Asunto: Respuesta solicitud.</p>		
<p>Reciba un Cordial Saludo.</p>		
<p>JOHANNA VELANDIA SIERRA, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Yopal - Casanare, identificada civilmente con cédula de ciudadanía número 24.231.929 expedida en Monterrey (Casanare) y profesionalmente con T.P. 164.593 del C. S. de la J., en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E., Código 115, Grado 09, nombrada mediante Resolución No. 203 del 03 de junio de 2020, posesionada mediante Acta No. 008 del 03 de junio de 2020 y facultada mediante Resolución No. 469 de 2020, para proyectar respuesta a las consultas jurídicas, derechos de petición, acciones de tutelas, acciones de cumplimiento, populares y requerimientos de los juzgados y tribunales que se le realicen al Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. atendiendo a la petición elevada ante esta entidad mediante oficio No. 2021EE0218230, en el cual se solicita verificación de incapacidades médicas y atención medica brindada a la señora Erika Andrea Rodríguez Castrillón, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.035.224.595, me permito indicar que, teniendo en cuenta que corresponde a Subgerencia de Prestación de Servicios del HORO, área encargada de atender los asuntos asistenciales del hospital, emitir un concepto que permita dar una respuesta de fondo a las pretensiones planteadas en el escrito alzado a esta institución, le indico que junto a la presente se anexa un folio que contiene la respuesta dada a los interrogantes planteados tanto en el escrito de la petición como los propios de la oficina asesora jurídica.</p>		
<p>Igualmente le indico que, por parte de la Oficina Asesora Jurídica se procedió a efectuar el respectivo barrido en el Sistema Integral de Atención en Salud - Dinámica, software institucionalizado por el HORO, en el cual se encuentra la información en tiempo real de la atención médica (consulta, procedimiento, tratamientos, medicamentos, etc.) de manera prioritaria -Urgencias- así como aquella realizada por consulta externa de todos y cada uno de los usuarios que concurren al Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. concluyendo de ello que, NO se encuentra registro alguno asociado al número de identificación suministrado en el escrito de la petición.</p>		

Pág 88 – archivo proceso 246-21

Se evidencia entonces que se trató de una conducta reiterativa e injustificada, donde la señora Rodríguez Castrillón no corrigió tal comportamiento, incumplió los planes de mejoramiento, omisiones que quedaban ampliamente justificadas en documentación que generarn los diferentes procesos disciplinarios, los que no llevaron a la imposición de una sanción de este orden en tanto con providencia del 25 de abril de 2022 se declaró la nulidad de la actuación disciplinaria iniciada en el año 2021 por faltas cometidas en tal anualidad, nulidad que se fundamentó en la indebida aplicación de la norma disciplinaria, por aplicación de la Ley 734 de 2002 debiendo surtirse bajo la senda de la Ley 1952 de 2019. (pág 73/79 archivo copia rad 316-21)

Luego y en lo que atañe a las razones de separación del cargo de la empleada Rodríguez Castrillón el archivo 6.1.12 el INPEC da cuenta de la calificación de desempeño del periodo 01/01/2020 – 31/01/2021, con un resultado de 58.53 que corresponde a un nivel no satisfactorio, formato con firma de notificación a la

evaluada del 10/03/2021 y su constancia de ejecutoria al no interponer recurso alguno (pág 225 y 228) .

Calificación a la que se anexa los reportes de compromisos de mejoramiento en razón a los ausentismos ya referidos en el periodo evaluado, los formularios de seguimiento por llegadas tarde, exceso en los tiempos de toma de alimentos y evasión previo a la culminación de la jornada, las constancias de las respuestas desobligantes frente a los llamados de atención verbales, los informes de las ausencias que implicó la reasignación de funciones y la debilidad de seguridad y en el cumplimiento misional del complejo carcelario, las actas de seguimiento y retroalimentación, los que muestran un patrón de constantes ausencias injustificada en la prestación del servicio, a modo de ejemplo se revela la falta consecutivas en los días 25 de octubre al 16 de noviembre de noviembre de 2020 (pág 161/162).

Luego, en acta N° 506 de julio 12 de 2021 se emite el concepto no vinculante respecto a la evaluación de desempeño de la dragoneante Rodríguez Castrillón, dejando constancia de las diferentes actuaciones tendientes al respeto del debido proceso, la adecuación del puntaje obtenido al incumplimiento de los compromisos adquiridos (pág 206/207).

El INPEC demostró que en el nivel interno la Resolución 252 de enero 24 de 2019 establece el sistema de evaluación del desempeño laboral para el personal administrativo y cuerpo de custodia del INPEC (archivo N° 6.1.2) que refiere que los responsables de la evaluación de desempeño son los jefes inmediatos del evaluado o la comisión evaluadora, y en su artículo 15 establece como consecuencia de la calificación en nivel no satisfactorio: a) La separación de la

carrera administrativa y pérdida de los derechos inherentes a ella, b) El retiro del servicio , c) la pérdida del encargo y la obligación de regresar al empleo en el cual ostenta derechos de carrera. A la par, la resolución 6176 de 2018 por la cual se establece el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba en su artículo 10 establece las escalas de calificación donde el nivel sobresaliente lo es en porcentaje igual o superior al 90%, el satisfactorio lo corresponde a los rangos mayor al 65% e inferior al 90% y el no satisfactorio el menor al 65%.

Fue así como se emitió la resolución N° 186 de enero 14 de 2022 que declara insubsistente a Erika Andrea Rodríguez Castrillón en el empleo de dragoneante Código 4114, grado 11 de la planta Global del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC adscrita al complejo Penitenciario y Carcelario Medellín “Pedregal” por haber obtenido evaluación no satisfactoria de su desempeño laboral el periodo anual 2020-2021, Notificado personalmente el 22 de febrero de 2022 (archivo N° 6.1.3).

Siendo presentado el recurso de reposición donde la accionada adujo que su ausentismo siempre lo fue en razón de incapacidades médicas las que no adosó a la impugnación, siendo confirmada la decisión que la separó del cargo en Resolución 2588 de abril 18 de 2022 indicando que no existía duda de las razones que llevaron a la evaluación insatisfactoria, actuación también notificada a la señora Erika Andrea Rodríguez el 22 de abril de 2022 a las 12:45 pm

 INPEC <small>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario</small>	 La justicia es de todos	Minjusticia
---	--	--------------------

EN EL COMPLEJO VARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE MEDELLIN

ACTA DE NOTIFICACION

Medellín a los 22 días del mes de abril

En la Ciudad de Medellín, compareció la señora **ERIKA ANDREA RODRIGUEZ CASTRILLON** identificada con cedula de ciudadanía número 1.035.224.595, con el fin de notificarle la Resolución No 002588 del 18 de Abril de 2022, por la cual NO REPONE y en consecuencia CONFIRMA lo dispuesto en la resolución 000186 del 14 de enero de 2022, por la cual se declara insubsistente el nombramiento de la señora **ERIKA ANDREA RODRIGUEZ CASTRILLON** el cargo de Dragoneante Código 4114 grado 11, de la planeta Global del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Al notificado se le hace entrega una copia de la Resolución N° 002588 de fecha 18 de abril de 2022 y se le indica que en contra de la misma NO procede recurso alguno.

El notificado:

ERIKA ANDREA RODRIGUEZ CASTRILLON
NOTIFICADO
CC N° 1.035.224.595

Quien notifica:

Rdo
Dg. Erika Rodriguez C
22 abril de 2022
12:45 pm



(archivo N° 6.1.6)

Misma fecha en que se deja constancia que la ejecutoria de la decisión estaría supeditada al agotamiento del proceso de levantamiento de fuero sindical (archivo N° 6.1.7)

Ahora en lo que respecta a la prueba testimonial Elkin Robert Vargas y Laura Herrera Barbosa ambos superiores de la accionada en el mismo centro penitenciario que Erika Andrea presta servicios, al unísono expusieron que la accionada de forma continuada se ausentó de sus funciones sin ofrecer una justificación, como tampoco adecuar su conducta.

Son estos los elementos de prueba adosados al trámite con los que se establece que hay lugar a la terminación de la garantía foral para dar lugar a la ejecución de la resolución N° 186 de enero 14 de 2022 que declaró insubsistente a la accionada.

Se demostró con suficiencia que Erika Andrea Rodríguez Castrillón fue rebelde al cumplimiento de los deberes que su cargo implicaba; de forma injustificada, repetitiva y por varios días consecutivos no se presentaba a trabajar, en otras ocasiones lo hacía excediendo la hora de ingreso o se retiraba sin autorización previo a la culminación de la jornada, pese a suscribir compromisos de mejoramiento los ignoraba, emitía respuestas desobligantes a sus superiores y compañeros, además que pretendió justificar su ausencia en certificados de incapacidad que fueron desconocidos por la institución prestadora de servicios de salud que dijo haberlos emitido.

El ente empleador resaltó la gravedad de la conducta descalificada, no solo respecto al incumplimiento de los deberes generales que se asumen en un empleo, pero además de cara a la función que desempeñada por el INPEC ya que ella como integrante del cuerpo de custodia del centro carcelario debía hacerse presente, so pena generar reasignación de funciones, lo que de forma cierta y objetiva debilita la seguridad y en el cumplimiento misional del complejo carcelario.

Se evidenció que el ausentismo laboral fue una constante en los años 2018 a 2021, con múltiples llamados de atención y procesos disciplinarios que, si bien no concluyeron en una sanción drástica, sí reflejan la sistemática rebeldía de Erika Andrea de ajustar su comportamiento. Siendo este un elemento que despeja toda duda respecto a la motivación de la separación del servicio de la funcionaria, la que no tiene ninguna relación con su condición de agremiada y dirigente sindical, sino que fue un reflejo del continuado incumplimiento de la actora de sus deberes.

Y bajo tal comportamiento reprochable, se justifica la evaluación insatisfactoria del

servicio, cuya consecuencia establece la resolución 252 de enero 24 de 2019 que en su artículo 15 que no es otra que el retiro del servicio y la separación de la carrera administrativa y pérdida de los derechos de carrera, decisión que como se refirió, fue debidamente emitida, notificada, frente a la cual se permitió el derecho de contradicción donde la recurrente no justificó ora su actuar contrario a la norma, ora sus argumentos de defensa bajo incapacidades médicas cuya validez no se demostró.

En suma, verificados como están los presupuestos para el levantamiento de la garantía foral a ella se accede, dando paso a la ejecución de la resolución N° 186 de enero 14 de 2022.

Resta por indicar que los argumentos por la pasiva en el escrito que denominó “recurso de apelación” no rebaten las conclusiones ya expuestas así:

Su imposición fue extemporánea, en tanto la sentencia se emitió en audiencia oral el 26 de enero de 2023, mismo momento en que habría de presentarse los recursos, el que remitió por medios digitales el 3 de febrero de 2023 sin justificación suficiente de la ausencia a la diligencia previamente señalada y cuya programada se notificó en audiencia previa del 9 de diciembre de 2022 (archivo N° 12)

Pese a lo anterior, si se abriera paso a la valoración de los argumentos de impugnación la corporación no tendría la competencia para pronunciarse al respecto en tanto solo en este “recurso” la pasiva expuso la existencia de una excepción, cuya proposición hace parte de la contestación de la demanda, la que no existió, y en su ausencia está vedado para el funcionario judicial pronunciarse al respecto por ser una estrategia de defensa reservada para el accionado (artículo 28 del CGP)

Y si aun en gracia de discusión este funcionario se pronunciara sobre la ocurrencia de la prescripción extintiva, la conclusión sería negativa en tanto notificada personalmente la resolución N° 2588 2022 (por la cual se confirma el acto de declaratoria de insubsistente de la accionada) el 22 de abril de 2022 (archivo N° 6.1.3) y presentada la acción judicial el 10 de junio de 2022 (archivo N° 1) es claro que no trascurrió el plazo de 2 meses que señala el artículo 118A del C.P.T.S.S, por tanto este medio exceptivo no tiene vocación de éxito.

En los términos expuestos se revisa la providencia en el grado de consulta, dando lugar a su confirmación.

Costas como dispuso la A quo, dentro del grado de consulta no se causaron.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL CONFIRMA** la sentencia revisada en el grado de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia.

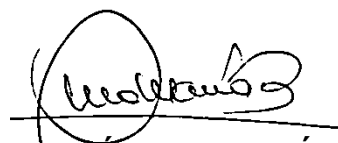
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-008-2022-00251-01

Accionante: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Demandado: ERIKA ANDREA RODRÍGUEZ CASTRILLÓN

Vinculado: ASOCIACIÓN SINDICAL DE PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-
DIRECTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-ASPEC ANT
Y SINDICATO DE EMPLEADOS UNIDOS PENITENCIARIOS -SEUP
SECCIONAL MEDELLÍN

Decisión: **CONFIRMA**

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 27 de febrero de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO